



"El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte" Ignacio Ellacuría

Editorial

2

Los salvadoreños y la televisión

Político

4

¿Riesgos políticos calculados?

Económico

6

El Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación

Económico

8

¿Están listos los empresarios para el TLC?

Social

10

Violencia, politización e incapacidad institucional

Regional

13

Las opiniones sobre el debate presidencial estadounidense

Reporte IDHUCA

15

Reinstalos en la PNC

Los salvadoreños y la televisión

El miércoles 29 de septiembre La Prensa Gráfica publicó los resultados de un sondeo de opinión, realizado por el mismo periódico, en torno a los gustos de los salvadoreños sobre el contenido de la televisión local. Sin entrar en pormenores acerca de la ficha técnica del sondeo, ni acerca de los distintos contenidos abordados en ella, hay que retener una de las afirmaciones básicas del sondeo: "los sociólogos —se dice en sus primeras líneas—, muy dados a culpar a la televisión de muchos de los problemas actuales, quizás no se van sentir muy cómodos al saber la calificación que dan los salvadoreños al contenido de la 'caja boba". ¿Cuál es esa calificación?: siete como promedio, en una escala del cero al diez.

Es interesante detenerse en esa afirmación porque en ella se hacen patentes la ligereza y la superficialidad con la que las grandes empresas mediáticas del país suelen abordar temas cuya complejidad e importancia exigen —sin hablar de la responsabilidad ética— mayor discernimiento analítico. Para comenzar, volviendo a la afirmación citada, ¿qué se quiere decir cuando se señala que los sociólogos no se van a sentir muy cómodos al enterarse de la calificación dada por los salvadoreños a la televisión local? ¿Se quiere decir que esa valoración desmiente sus diagnósticos sobre el impacto de la televisión en la conciencia ciudadana? ¿O sencillamente que con el resultado revelado por La Prensa Gráfica su pesimismo acerca del influjo de la televisión local será mayor?

Lo primero obviamente no es cierto: que los salvadoreños, especialmente los de menor escolaridad, valoren positivamente a la televisión, no pone en jaque los diagnósticos sociológicos sobre los medios locales y su impacto, sino que, por el contrario, confirman muchas de sus previsiones más preocupantes. En este sentido, es lo segundo lo que tiene más visos de realidad: si los resultados del sondeo en cuestión provocan alguna incomodidad en los sociólogos, la misma tiene que ver con la confirmación del poder de la televisión local —un poder, por lo general, nefasto— sobre la conciencia colectiva de los salvadoreños. De todos modos, hubiera sido bueno que los responsables del sondeo explicaran la supuesta "incomodidad" de los sociólogos ante los resultados arrojados por el mismo.

Sin embargo, más allá de confusión que destila la hipótesis sobre la incomodidad de los sociólogos, hay algo más grave en el informe de La Prensa Gráfica y que aparece en las líneas antes citadas: sostener que los sociólogos son "muy dados a culpar a la televisión de muchos de los problemas actuales". Se trata, a todas luces, de una afirmación no sólo ligera, sino que revela un desconocimiento absoluto de la producción sociológica —local e internacional— en torno al influjo de la televisión —y en general, de los medios de comunicación— en la sociedad actual.

Para comenzar, no es cierto que la sociología reciente culpe a la televisión de muchos de los problemas actuales. Ni la violencia, ni la pobreza, ni la desintegración de la familia, ni el deterioro ecológico —por mencionar sólo unos cuantos problemas de las sociedades contemporáneas— se le atribuyen al influjo de la televisión. Ello no quiere decir que la sociología no se preocupe por la televisión; al contrario esta última —y el entramado mediático al que pertenece— es objeto de análisis y reflexiones que, desde una perspectiva crítica, ponen de relieve el impacto de la televisión, por el predominio de la imagen que le es consustancial, en la conciencia individual y colectiva, convirtiéndose en un filtro a través del cual grupos e individuos miran la realidad y actúan en consecuencia.

Un autor tan respetado como Giovanni Sartori hace ver los grandes peligros que se ciernen sobre unas sociedades dominadas por las imágenes mediáticas, sobre todo por las emanadas de la televisión: todo se vuelve inmediato y fugaz, la realidad se desintegra en sensaciones visuales que impiden la reflexión de conjunto y la mirada crítica (Cfr. Giovanni Sartori, Homo videns. La sociedad teledirigida, Madrid, Taurus, 1997). Ignacio Izuzquiza, otro connotado pensador social, también advierte de los peligros que trae consigo el predominio de la televisión y de la imagen, pero enseña los desafíos para una cultura —la occidental— dominada por la cultura alfabética y narrativa (Cfr. Ignacio Izuzquiza, Filosofía del presente. Una teoría de nuestro tiempo. Madrid, Alianza, 2003).

Así pues, la sociología reciente —la que se elabora desde la década de los años noventa en adelante— ha comenzado a enfatizar ciertos aspectos en el predominio de la televisión que no suponen culparla por muchos de los males de las sociedades actuales, sino más bien destacar su impacto decisivo en la forma cómo los ciudadanos perciben su realidad inmediata y mediata.

Las reflexiones sociológicas hechas en El Salvador —las más creativas— se hacen cargo de la discusión anterior, a la vez que intentan leer el impacto particular que tiene la televisión local en la conciencia ciudadana. Las conclusiones a las que se ha llegado son francamente preocupantes: la televisión local de mayor impacto social no sólo es parte de un conglomerado mediático de derecha, sino que usa el poder de la imagen para manipular la conciencia de los salvadoreños. Esta conclusión vendría a ser reforzada por la calificación que dan esos mismos salvadoreños a la televisión: ésta los puede manipular, porque los ha embaucado con su juego de imágenes.

En fin, no se entiende por qué no se quiere reconocer la competencia de la sociología en un tema tan delicado como el del impacto social de la televisión. ¿Será que se pretende vender la idea de que ahora son los periodistas los llamados a analizar las dinámicas sociales y a proponer alternativas de solución a los problemas que ellas generan?

¿Riesgos políticos calculados?

Mientras Saca adormece a la población con discursos bonitos acerca de sus buenas intenciones y su buen talante, la dinámica de la interacción entre los partidos políticos no se ha movido ni un ápice de su crispación anterior. En su carrera hacia los escaños legislativos y los gobiernos municipales en las próximas elecciones, los areneros, comenzando con el presidente Saca, están dispuestos a olvidar la tregua en el enfrentamiento político con el principal partido de oposición. Quieren terminar de hundir en el fango al adversario, aprovechando la delicada coyuntura interna que actualmente vive.

Hay una serie de elementos que han marcado la vida política en estos últimos días y que motivan el título de este comentario. En primer lugar, la batalla campal que los pequeños empresarios de las calles de las principales ciudades del país están librando con los alcaldes del partido de izquierda. También es necesario tomar en cuenta la reprimenda pública de Saca y otros dirigentes areneros al alcalde de la ciudad de San Martín por haber decidido incorporarse al proyecto MIDES. El comportamiento oficial en estos dos temas, entre otros, es una señal clara de la estrategia de debilitamiento del FMLN que se promueve desde los círculos oficiales del partido de derecha.

Los vendedores de la discordia

Resulta curioso que uno de los principales defensores de los vendedores de las calles de Santa Tecla sea el ministro de Gobernación, René Figueroa, conocido por sus declaraciones intempestivas en contra de los que reclaman sus derechos desde la calle. El fiel defensor de las buenas obras de Saca, se declaró estupefacto por la actitud del Alcalde de Santa Tecla, Óscar Ortiz, que no supo negociar con los vendedores de las calles.

Llama poderosamente la atención que, según la curiosa lectura del ministro encargado del resguardo de la seguridad interna del país, las autoridades municipales son

más culpables que los vendedores que atacaron sin piedad la infraestructura municipal. Contrario a la costumbre del partido del ministro, curiosamente en sus declaraciones no tuvo ni una palabra para el orden público que se vio alterado. Llama la atención el hecho, porque son estos mismos sectores areneros los que suelen proponer, a diestra y siniestra, iniciativas de ley para tratar como terroristas a quienes defienden sus derechos desde las trincheras de las barricadas.

Tampoco el funcionario hizo mucho para explicar el hecho de que la policía haya observado de manera pasiva los desmanes de los vendedores. En efecto, los responsables policiales deben ofrecer una buena explicación acerca de su actitud en torno a los disturbios ocurrido en Santa Tecla. La fácil explicación como la que enarbolan algunos editorialistas que echan todo el embrollo al cuento de una supuesta disputa entre ortodoxos y renovadores del partido de izquierda, no es suficiente para respaldar tal comportamiento.

Un presidente militante

Todos conocen la filiación política de Saca. De modo que el mote de presidente militante no pretende dejar de lado el hecho de que el presidente haya sido elegido bajo la bandera arenera y que en buena medida simpatice con aquello de eliminar físicamente a los comunistas que se predica en su partido. Sin embargo, también es de subrayar el hecho de que, dado el arreglo institucional de nuestro sistema político, al presidente se le representa con una investidura nacional que desborda los límites de su propio partido.

Saca lo entendió cuando declaró que se considera el presidente de todos los salvadoreños sin excepción alguna. Eso es así porque, a diferencia de otros sistemas electorales, el sistema presidencial a doble vuelta, pretende obviar esta realidad y crear mayorías automáticas, aunque, en realidad, sean un tanto ficticias.

Por esa razón, de costumbre, los jefes

de Estado en estos sistemas se cuidan de presentar a un partido en concreto. Porque su legitimidad descansa en la representación del conjunto de la sociedad. Sin embargo, en el caso de Saca las cosas no han caminado de la misma manera. En primer lugar, el presidente sigue siendo el presidente de su partido. Sigue siendo la persona que se encarga de la organización en todos sus vericuetos internos. Ni siquiera ha delegado en una especie de secretario general las funciones de coordinación de la organización partidaria.

Recientemente Saca ha evidenciado la colisión entre sus funciones de presidente de la república y de jefe supremo del partido oficial. Ante la decisión del Alcalde de San Martín de asociarse al proyecto MIDES, el presidente declaró públicamente, palabras más palabras menos, que tal decisión iba en contra de los intereses de su partido. No sólo se trata de una declaración atípica para un presidente, sino que deja planteado que pasan en segundo plano los daños al medio ambiente, y la violación de la ley ambiental, en que incurren las alcaldías que arrojan en cualquier lado los desechos recolectados. Curiosa manera de ponerse en evidencia por parte de un personaje que venía aduciendo su condición de moderado para evitarse preguntas incómodas sobre el comportamiento de sus correligionarios.

A decir verdad, ha habido señales suficientes para derrumbar la idea de un Saca totalmente aséptico a las discusiones partidarias, solamente interesado en resolver los problemas de los salvadoreños. Pero, los dos hechos comentados anteriormente vienen a profundizar un poco más en el tema de la hipocresía del presidente.

¿Riesgos calculados?

La decisión de Saca de seguir al mando de ARENA y de reprimir cualquier voz disidente en el seno del partido oficial obedece a una estrategia bien clara. El presi-

dente nunca fue un militante activo del partido y, por lo tanto, no cuenta automáticamente con las lealtades necesarias para asentar su poder en el seno de la organización. Además, la mayoría de los diputados actuales de ARENA deben su elección a Francisco Flores, quien no era precisamente un defensor de la candidatura de Saca.

El presidente, además, aprovecha su popularidad en los sondeos de opinión pública para asegurarse el poder dentro del partido. La incapacidad de la oposición para superar sus problemas internos juega a favor de la concentración de poder en las manos de Saca. Mientras los adversarios son inaudibles, la conexión partido oficial-presidencia de la República no representa ningún riesgo político. Al contrario, en esta coyuntura, juega a favor del presidente, que pedirá sin duda a los electores, en las próximas elecciones, que le den la mayoría necesaria para poder llevar adelante sus propuestas.

Pero, por otro lado, no obstante la astucia política de Saca, la decisión, al parecer aplaudida, de su ministro de gobernación en el caso de la pasividad de los policías frente al ataque en contra de la Alcaldía de Santa Tecla, contribuirá aun más a debilitar la institucionalidad del país. Se hace más claro que la PNC interviene para reprimir solamente a los manifestantes cuyas demandas afectan la paz política de los políticos oficiales.

Esto se llama politización de la policía. No se trata de exigir mano dura y atropellos al derecho de manifestarse en las calles por decisiones que se consideran injustas. Hay que exigir el correcto funcionamiento de las instituciones públicas. Está demostrado que, en Santa Tecla, los policías, cuyo deber es proteger vidas y bienes de los ciudadanos, dejaron que los vendedores cometieran impunemente actos vandálicos en perjuicio de los bienes municipales.

El Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación

La semana pasada, el ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, llegó a la Asamblea Legislativa para presentar el Anteproyecto de Ley de Presupuesto General de la República para 2005. Según el documento, el gasto del Estado para el próximo año ascenderá a 2,992 millones de dólares, incluyendo un incremento de \$198.1 millones con respecto al presupuesto de 2004. Uno de los aspectos más relevantes del documento se refiere a la emisión de bonos de deuda pública para el financiamiento de las actividades del Estado. A través de dicha emisión se espera obtener un poco menos de 542 millones de dólares. A este monto se debe agregar un desembolso de 200 millones de dólares para pagar los préstamos contraídos en períodos pasados. En su totalidad, los gastos debidos a la deuda pública estarían por encima de los 700 millones de dólares, lo cual se acercaría al 25% del Presupuesto General de la Nación.

Según el anteproyecto, existen diferentes entidades del Estado que percibirán aumento en sus gastos: Presidencia de la República, Órgano Judicial, Ministerio de Hacienda, Educación, Salud y Gobernación, entre otros. El incremento promedio que recibirán estas instituciones se encuentra próximo a los 20 millones de dólares. También se encuentran otras instituciones que recibirán un incremento, pero será más modesto: la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Agricultura, la Corte de Cuentas y la Universidad de El Salvador (UES), entre otros. En este grupo, los aumentos rondan alrededor de los \$2.5 millones. Como caso excepcional, está la UES, la cual recibirá siete millones de dólares más que el presente año.

Por otro lado, se encuentran las dependencias del Estado que sufrirán un recorte de gastos para el próximo año: los Ministerios de Economía y Obras Públicas, la Fiscalía (FGR) y la Procuraduría General de la República. El decremento en promedio

en algunas dependencias del Estado es apenas de un millón de dólares. Por otro lado, están las que prácticamente se mantendrán con el mismo monto asignado para el 2004: Procuraduría de Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral y Consejo Nacional de la Judicatura. De esta manera, se puede notar que el incremento en los gastos del Estado se encuentra enfocado mayormente a muchas de las unidades que se encuentran bajo el mando del Ejecutivo. Las correspondientes al Ministerio Público prácticamente mantendrían sus gastos sin alteraciones.

El espinoso tema de la deuda pública

Uno de los puntos de mayor confrontación que se prevé en la discusión del presupuesto en la Asamblea Legislativa se refiere al estado de la deuda pública. Acá es importante tener presente las palabras expresadas por el diputado del FMLN, Gerson Martínez: “el país se puede seguir endeudando, pero el punto es que ha sido un endeudamiento estéril”. En este sentido, mucha de la deuda que ha contraído el país en los últimos años, incluso en fechas anteriores a los terremotos, se ha caracterizado por no haberse canalizado hacia la inversión productiva. Es obvio que para el buen ejercicio de las actividades del Estado es necesario de igual manera financiar los gastos corrientes pero la utilización de deuda deberá estar más encaminada a desarrollar proyectos productivos para el país.

El meollo del problema es el bajo coeficiente de recaudación fiscal que tiene el país. Un incremento sustancial en la obtención de ingresos para el erario público disminuiría en buena medida el monto de la deuda. Esta tiene un límite, pues la emisión de deuda de manera indiscriminada podría atentar a la clasificación de riesgo del país, haciendo poco atractivo los bonos del Estado en los mercados internacionales. En otras palabras, es importante tener presente el vínculo que existe entre la emi-

sión de bonos del Estado y la clasificación de riesgo país.

A futuro, uno de los problemas más acuciantes que deberá sobrellevar la actual administración es la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo. El Salvador ha recurrido en los últimos años a la emisión de deuda para solventar sus necesidades financieras. Para los especialistas, la mayor parte de los ingresos que obtienen mediante deuda no se logran canalizar en programas de inversión. De hecho, un endeudamiento parte de la idea de que a futuro se tendrán mejoras en las fuentes de ingreso de la nación; de esto depende que sea pagable una deuda.

Para mejorar los ingresos nada es más conveniente que la reactivación del aparato productivo nacional, pero este nuevo presupuesto parece indicar que aún los gastos de la nación no se han sabido perfilar en esa dirección. No es dañino para el país el endeudamiento, siempre y cuando éste sea canalizado a actividades que generarán réditos en el mediano y largo plazo. Lamentablemente, no puede decirse lo mismo de los empréstitos de las administraciones pasadas. La economía salvadoreña no da visos que su aparato productivo funcione de manera correcta y dinámica.

¿Y la cuestión social?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el monto destinado para la ayuda de las familias en situación de pobreza extrema. Cabe recordar que el mandatario salvadoreño, durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se comprometió a llevar a cabo un programa de subsidios enfocado a paliar la situación de la pobreza en el país. Según el anteproyecto de ley del presupuesto, este programa solamente tiene destinado apenas un millón de dólares para hacer frente a las necesidades de 220 mil familias salvadoreñas. ¿Qué sentido puede tener esta asignación? Se espera que dicho programa tenga primero una etapa de desarrollo logístico en el cual se traten de identificar de manera muy concreta las familias más pobres del país. Esta "cartografía" de la po-

breza haría más eficiente la canalización de las políticas públicas para la eliminación de la pobreza en los próximos años. En otras palabras, todo parece apuntar que dicho programa dará paso a un diagnóstico lo más preciso posible de quienes son los más pobres. A futuro, tal como lo mencionó Suárez, el plan para combatir la pobreza deberá relacionarse con la política social que realiza el gobierno a través de los Ministerios de Salud y Educación. Además, podría verse beneficiado con la implementación en el futuro del Fondo para la Salud (FOSALUD).

Por otro lado, una de las "incongruencias" que caracterizará la política pública de Saca para el 2005 es el incremento en la asignación presupuestaria para Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC), en el marco del plan "Súper mano dura", y lo destinado al funcionamiento de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué la incongruencia? Para que se lleve a cabo con éxito el plan contra la delincuencia no es necesario únicamente el esfuerzo preventivo, sino también en el área de funcionamiento del sistema judicial. Para el caso específico del plan contra las pandillas, los fiscales juegan un papel importante, pues son ellos los que tienen parte activa en el proceso judicial de los pandilleros. Por esto, no se entiende cómo se busca llevar a la cárcel a todos los líderes de las maras, sin haber incrementado el presupuesto de la FGR.

Finalmente, el Presupuesto General de la República es un instrumento de política económica que bien utilizado puede ayudar para la reactivación de la economía. Sin embargo, un vistazo general a la estructuración presupuestaria para el 2005 dice que habrá muy poca asignación para dependencias importantes para la reactivación de la economía. Si se sigue contrayendo más empréstitos vía emisión de deuda y no realizar una inversión que potencie la estructura productiva del país se estará próximo a caer en una situación de insolvencia financiera que tendrá fuertes repercusiones para la economía.

¿Están listos los empresarios para el TLC?

A la espera de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés), una vieja interrogante sale a la luz: ¿realmente están las empresas salvadoreñas listas para participar en dicho acuerdo? Con el propósito de encontrar una respuesta, se han realizado sondeos con diferentes entidades, las opiniones son diversas.

Recientemente, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador realizó una encuesta tomando como muestra 166 empresas de diferentes sectores de la actividad económica. Según los resultados de dicha encuesta, más de la mitad de empresarios de los diferentes sectores y tamaños están preparados para incorporarse a las exigencias del TLC. Del total de entidades encuestadas, el 53% manifestó estar listo. Este porcentaje contrasta con el 47% que confesó no encontrarse preparado. La representación muestral tomó el 31% de la industria, un porcentaje similar del comercio, 34% de servicio y 4% de la agroindustria. Asimismo, reveló que el 19% de la muestra pertenecen a la microempresa, 37% son pequeñas empresas, 23% a las grandes y 3% no identificó su tamaño.

Las empresas que se consideran estar preparadas para el TLC, manifestaron que han tomado cartas en el asunto y por eso han realizado algunas mejoras en la producción, dentro de las cuales se pueden mencionar: aumento en la calidad de productos, cambios en la estructura organizacional, alianzas estratégicas, capacitación sobre normas de calidad, cambio en proceso de producción, compra de maquinaria, investigación del mercado estadounidense, procesos de certificación ISO y participación en programas de asesoría para exportar.

Sin embargo, ¿qué sucede con el 47% de las empresas que dijeron no estar listas para competir en los mercados internacionales? Desgraciadamente, la encuesta no identifica cuales de las pequeñas, micro o grandes empresas están preparadas para el TLC. Lo que sí se conoce, es que los que menos lo están son los sectores de la industria del

calzado, alimentos y metal.

En este sentido, y con el propósito de conocer las necesidades y capacidades de los empresarios que competirán en el mercado internacional, el gobierno y las gremiales empresariales manifestaron haber reforzado mediante decreto Legislativo la Comisión Nacional de Administración de Tratados Comerciales (CONATCO), ya que recientemente se llevó a cabo un encuentro entre los dirigentes empresariales del sector industrial, exportador, agrícola y de la pequeña y mediana empresa con la ministra de economía, Yolanda Mayora de Gavidia. La ministra manifestó que entre las funciones que realizará dicha entidad es la de crear once grupos de trabajo técnico que se encargarán de dar seguimiento permanente a temas de los acuerdos comerciales y de integración, tales como textiles, confección, agrícola y laboral, entre otros, conformados por empresarios y gobierno. También consideró que el nuevo decreto “constituye un mecanismo idóneo de participación y de cooperación mutua, entre el sector privado y público, para cumplir los TLC”.

La funcionaria señaló, además, que “los empresarios son quienes aprovechan las oportunidades creadas por los tratados de libre comercio, por tanto, son ellos quienes pueden informarnos de primera mano sobre los temas en los cuales hay que trabajar o sobre las dificultades que están encontrando en el comercio”.

En este sentido, las perspectivas que tienen los empresarios salvadoreños con respecto al TLC, son muy variadas; por un lado los grandes exportadores salvadoreños ven más beneficios que desventajas en una relación comercial sin trabas con los Estados Unidos. En lugar de desventajas o amenazas, prefieren hablar de “desafíos”. Un caso clave es el exportador Quiñónez. Para él, el TLC es la puerta ancha por la que entrarán las alianzas estratégicas. “La visita se traducirá en oportunidades de hacer negocios, transferir tecnologías y abrir mercados que, de otra manera, o no serán ofrecidas a nosotros, o bien se irán para otros destinos”, sostuvo en

un artículo aparecido en la revista *Comercio e Industria*. Por otro lado, la opinión no es la misma para las pequeñas y microempresas.

PYMES: la otra cara de la moneda

“La pequeña empresa no está lista para el TLC”, afirmó el ex presidente de la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios Salvadoreños (AMPES) Jorge Mariano Pinto, en una entrevista en diciembre del pasado año. “La tecnología con la que trabajan es obsoleta, la falta de créditos, el elevado precio de la energía eléctrica y los problemas sociales de salud y seguridad laboral, son las dificultades a las que se ven expuestas la mediana y pequeña empresa (PYME) en el contexto de los acuerdos del libre comercio”, agregó.

Su sucesor, Maximiliano Portillo, según el informe de coyuntura del primer semestre, aseveró que “el 2004 no se perfila como el mejor año para las pequeñas y medianas empresas debido a que las ventas se redujeron en un 25% el primer trimestre, durante el contexto de las elecciones presidenciales. A esta situación, súmese la falta del presupuesto estatal”. De acuerdo con el nuevo presidente del gremio, “un tercio de las ventas de las pequeñas y medianas empresas han caído por la falta de presupuesto”.

Esta problemática puede verse reflejada en el caso de los pequeños proveedores de bienes y servicios al Estado, ya que “debido al retraso de pagos del gobierno, que debe facturas desde enero de este año, ha habido estancamiento y miedo en el sector”, agregó. El gerente de desarrollo empresarial de AMPES, Mario Díaz, aseveró que “si las finanzas del gobierno no se actualizan para este año el panorama será un caos”. “Tenemos 2 mil 500 agremiados; de estos, un 20% ó 30% manifestaron experimentar estos problemas, especialmente del sector industrial, como librerías”, explicó.

El nuevo presidente de AMPES aseguró que el principal eje de acción durante su gestión será la asociatividad y el ordenamiento del sector. La estructuración de los empresarios en redes responde a la necesidad de aprovechar los mercados que se abrirán debido al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. “Yo no creo en las asimetrías de las que hablan los detractores del TLC con

Estados Unidos, porque si asimetría hubiera existido entre David y Goliat nunca hubiera vencido David. No se trata de vencer a la Unión Americana, sino al miedo de entrar al TLC”, afirmó.

El informe de coyuntura de AMPES también reveló que los pequeños empresarios no consideran que el CAFTA les traiga beneficios, al menos no en el corto y mediano plazo. “La publicidad del gobierno insiste que hay grandes oportunidades con el TLC, pero si no podemos conseguir visa ni hay créditos para comprar en el exterior esto se vuelve difícil; además, quienes van a buscar las oportunidades salen defraudados”, declaró Pinto. Del sondeo se desprende una situación aún más preocupante: el sector no está pensando en exportar, sino en importar productos terminados para convertirse en comerciantes. De ser así, AMPES desearía que el sector se decidiera a importar maquinaria para mejorar la producción; sin embargo, los pequeños empresarios estiman que no se percibe apoyo gubernamental para desarrollar sus empresas y que todo lo ofrecido se va en publicidad.

Dichas opiniones contrastan la visión del ex ministro de Economía, Miguel Lacayo, quien explicó que el 2003 fue muy productivo para las PYMES. “El país ha alcanzado los 200 mil micro créditos con apoyo del Plan de Ampliación de Cobertura de Microcréditos, y se otorgaron 16 mil 271 créditos más que en el 2002. Para 2004, las proyecciones apuntan a lograr los 240,000 créditos establecidos como meta”. También afirmó que en lo que respecta a la asociatividad se fortalecieron a 31 grupos asociativos pertenecientes a 264 empresas de los departamentos de La Paz, Usulután, San Vicente, San Salvador, San Miguel, Chalatenango, La Libertad y Santa Ana, principalmente en sectores como fruticultores, artesanos, tenería, turismo, panadería, cuero y calzado, entre otros.

El TLC con Estados Unidos crea, por un lado, expectativas y, por otro, ansiedades y miedos. Sin embargo, las cosas no terminan aquí. La coyuntura preelectoral en los EEUU atrasa la implementación del CAFTA. El Salvador, como muchos países latinoamericanos, depende de la política de Estados Unidos, y no queda más que esperar.

Violencia, politización e incapacidad institucional

El ordenamiento de los espacios públicos urbanos y el tratamiento eficiente de los desechos sólidos de los salvadoreños nuevamente se han topado con dos de sus peores enemigos: la politización y la incapacidad institucional. Ciudades limpias y ordenadas son indicadores inequívocos de la cultura y la convivencia de los habitantes de un país. En El Salvador, sobra decirlo, hay grandes déficits respecto de estos indicadores. En dicho atraso influyen, además de las carencias institucionales y las manipulaciones políticas, actitudes, comportamientos y normas cuyo cambio es indispensable para alcanzar los niveles de desarrollo que insistentemente prometen los sucesivos gobiernos.

Las reacciones de los políticos de derecha ante los ataques que días atrás hicieron comerciantes informales en contra de los palacios municipales de Santa Tecla y Cojutepeque son muestra de la más burda politización. También lo es la necia postura de los dirigentes del Consejo Ejecutivo de ARENA (COENA), incluyendo su presidente, de impedir que el alcalde arenero de San Martín deponga los desechos sólidos de su municipio en el relleno sanitario de Nejapa, liderado por alcaldes opositores, bajo el pretexto de que es ilegal. También tienen algo de manipulación política las protestas de los sindicalistas de las alcaldías, que en los últimos días se han dado a la tarea de boicotear los servicios que prestan las municipalidades.

Por otro lado, la incapacidad de los gobiernos municipales ante el problema del reordenamiento de sus respectivas ciudades y la pasividad de la Policía Nacional Civil en los casos en que se rebasa la frontera de la legalidad dicen mucho de la debilidad institucional ante problemas que competen a todos los salvadoreños. En efecto, la convivencia ordenada en los pue-

blos y ciudades, así como la disposición final de la basura, entre otros, son asuntos que debieran trascender las pasiones políticas y los impedimentos coyunturales.

Antecedentes

Los intentos de reordenamiento de los principales centros urbanos del país no son cosa nueva. Las anteriores administraciones hicieron lo suyo, con todo y las limitaciones. Pero ha sido desde mediados de la década del noventa que los gobiernos municipales han retomado esa tarea con mayor ímpetu, independientemente de la bandera política. Para esas fechas coincide también la expansión de comerciantes informales apostados en la vía pública, que vinieron a sumarse a los ya presentes durante años. Tal situación se ha vuelto insostenible e insoportable para los miles de salvadoreños que hacen su vida diaria en dichos centros urbanos, exponiéndose al desorden causado, en gran parte, por comerciantes informales y empresarios del transporte público.

A partir de las últimas tres administraciones municipales de San Salvador, por ejemplo, se ha sabido de fuertes enfrentamientos entre autoridades y aquellos comerciantes, quienes se han mostrado reacios a abandonar sus puestos. En ese escenario, surge el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, un contingente dotado de armamento básico, que tiene como obligación defender el patrimonio municipal. Allí justamente ha venido a agravarse el actual problema. Dicho cuerpo ha sido cuestionado por traspasar la línea de sus funciones en materia de seguridad ciudadana, mientras, por otro lado, la Policía Nacional Civil ha actuado con poco profesionalismo a la hora de atender los llamados de las municipalidades.

A finales de esa década coincide también el inicio del proyecto de tratamiento

de desechos sólidos en el relleno sanitario de Nejapa, al norte de San Salvador, en el que participan únicamente las comunas gobernadas por el FMLN dentro del Área Metropolitana. De todos es conocido el escándalo que hiciera un periódico de derecha por supuestas irregularidades en el contrato que aquellos alcaldes hicieran con una empresa de capital canadiense. Justamente, durante los últimos días, ese medio ha comenzado una nueva ofensiva mediática en contra de los socios del relleno de Nejapa, campaña que habría incidido en la postura del COENA arriba mencionada.

Municipalidades y problemática social

El municipalismo no puede desvincularse de la complicada situación que atraviesa todo el tejido social salvadoreño. Es evidente que el problema social en El Salvador está vinculado a la pobreza creciente y la falta de atención a las demandas reales de la población. En medio de un sistema político-económico construido para privilegiar a los grupos hegemónicos se vuelve casi imposible atender las demandas de la población menos privilegiada del país. De hecho, un desfase entre las demandas de la población y la actividad del Estado es otro de los indicadores que dan cuenta del incipiente desarrollo del país en materia democrática.

La actividad de las municipalidades, más allá de las atribuciones administrativas, pasa por velar por el bienestar y tranquilidad de los ciudadanos que gobierna. Pero sus esfuerzos, por válidos que sean, no tendrán mayor impacto en las condiciones de la vida de la gente si no se vinculan con la actividad de todo el Estado, coordinando los esfuerzos del gobierno central. Acá nuevamente radica el problema: la desvinculación de los esfuerzos por parte de las estructuras estatales debido a cuestiones de índole partidista.

La manipulación política

No se puede dejar de lado el interés

partidista que se mezcla definitivamente en las situaciones arriba mencionadas. Por ejemplo es evidente la manipulación política que hay detrás de las necesidades de los comerciantes y sindicalistas, pues si bien las necesidades y demandas podrían ser realmente urgentes, los últimos acontecimientos han abierto un campo fértil y abundante para la labor de atacar y desprestigiar a los adversarios políticos. Ello dificulta las tareas encaminadas a dar respuestas contundentes a los problemas abordados y se termina haciendo uso de las prácticas superficiales y cosméticas, tales como los pactos políticos y diplomáticos.

Los sindicalistas municipales han empezado a denunciar, en esa línea, un posible pacto político entre las autoridades de la alcaldía capitalina y el Ministerio de Gobernación, situación que, de ser cierta, debería examinarse con todo rigor crítico. Otros culpan de los últimos acontecimientos a la disputa interna del FMLN como si se tratara de una manifestación más de la lucha por el poder entre los ortodoxos y los llamados reformistas. Esto último es de difícil aceptación, a menos que la astucia política de los efemelenistas hubiera tocado fondo.

Si bien es cierto que el FMLN está jugando un papel importante en la vida del país, fundamentalmente desde las alcaldías que tiene en su poder, también es claro que su mayor adversario tiene claros sus objetivos. De ahí que el desafío que tiene el partido de izquierda desde sus gobiernos y estructuras de poder es encontrar las respuestas de las que está urgida la población; de lo contrario, este espacio que se ha ganado y que es en gran medida lo que le sostiene como segunda fuerza política del país, se le irá cerrando. Es curioso, en este sentido, que las alcaldías que han entrado en situación de conflicto sean dirigidas por el FMLN, lo que podría estar indicando que la población exige de ese partido un mayor acercamiento a sus demandas.

ARENA, por su parte, ha sabido sacar

provecho a esta y otras situaciones más complicadas; ha mostrado una actitud más cercana a la gente. La cara pública de dicho partido se muestra sensible y con deseos de buscar los caminos que conduzcan a darles verdaderas respuestas a los problemas de la población, aunque por la forma populista, demagógica y publicista de hacerlo, deja en evidencia su interés proselitista y electorero. Pero ofrece a la población lo que quiere escuchar.

Débil respuesta institucional

Al menos Carlos Rivas Zamora, alcalde de San Salvador, ha reconocido sus limitaciones. A mediados de septiembre, un matutino publicaba una entrevista realizada al jefe edilicio, quien acepta que los comerciantes organizados le han ganado la batalla en su plan de reordenamiento del Centro Histórico de la ciudad: “los vendedores se sienten envalentonados porque varias instituciones han dicho que la alcaldía se equivocó con el reordenamiento”, dijo el edil. El alcalde se refería a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que amparó la acción de los comerciantes y desvirtuó el proceder del Cuerpo de Agentes Metropolitanos y a la misma alcaldía. Al respecto, es conocida la misteriosa confrontación pública entre el alcalde capitalino y la procuradora.

La entrevista fue realizada luego que el Concejo Municipal capitalino delegara a la Policía Nacional Civil, vía ordenanza, las tareas de desalojos de ventas ilegales apostadas en calles y avenidas recuperadas por la municipalidad. Rivas Zamora declaró que la Alcaldía de San Salvador era incapaz de realizar esas tareas. Como respuesta, el viceministro de Gobernación, Rodrigo Ávila, se mostró en desacuerdo con la medida municipal y aseguró que la PNC no obedecería órdenes de la comuna capitalina. Nuevamente, hubo un enfrentamiento entre los intereses de ambas estructuras estatales.

Una municipalidad que declara sentirse incapaz de controlar esa situación y una

Policía plegada a los intereses políticos de ARENA dificultan la búsqueda de soluciones a la problemática. En ese escenario, las demandas ciudadanas difícilmente podrán ser escuchadas. Ante el silencio de la gran mayoría de sectores afectados por orden social que impera en el país, los síntomas de disconformidad quedan reducidos a esfuerzos que carecen de organización y sistematicidad. Ello condena al aislamiento, por un lado, y a la tentación de transgredir el sistema legal vigente, como el caso de los comerciantes. Aunque estos últimos dan signos de constituirse en una fuerza creciente, capaz de organizarse en todo el territorio nacional y desplazarse hacia cualquier lugar de la República con tal de hacer oír sus demandas. El método es lo de menos. Si es violento —razonarán— no hay cuerpo policial que les detenga.

Queda clara entonces, la necesidad de fortalecer institucionalmente a las municipalidades, a la misma Policía y a instancias como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero dicho fortalecimiento será en vano si no hay un cambio de actitud entre la clase política nacional, a fin de que se anteponga el bienestar ciudadano a los intereses partidarios.

La vía utilizada por los vendedores y sindicalistas no es la más adecuada y es más bien la reacción ante la violencia de la que son objeto de manera solapada, por parte de ese orden que margina, explota y somete. Un tipo de violencia que genera violencia. Es claro que no es este el camino correcto, por lo que también se deja ver que la solución a las demandas sociales no está simplemente en asegurar que la Policía esté preparada para frenar situaciones que se salgan de la legalidad.

En resumidas cuentas, los últimos acontecimientos violentos dicen mucho de unas municipalidades incapaces de controlar ese tipo de situaciones, de un cuerpo policial plegado a los intereses partidarios de ARENA y de unos comerciantes y sindicalistas que sacan provecho de las carencias institucionales para imponer su criterio.

Las opiniones sobre el debate presidencial estadounidense

Uno de los rituales por el que pasan las elecciones presidenciales en los EEUU es la serie de debates entre los candidatos en disputa. Se dice que aquel que sale mejor librado en ese pugilato televisivo logra el favor del electorado y tiene mayores posibilidades de agenciarse el triunfo. Esto último está por verse, porque, según lo demostraron las elecciones presidenciales anteriores, el debate presidencial no fue tan importante, como sí lo fueron las irregularidades denunciadas en el estado de la Florida —un estado al que se considera crucial en los resultados electorales—. El debate presidencial, que podría ser una ocasión en la que se discutan las propuestas de los candidatos, es también parte de la estrategia de mercadeo electoral de los dos grandes partidos políticos de los EEUU.

El entorno mediático y político salvadoreño no se ha mantenido ajeno al debate entre el presidente George Bush, que busca la reelección, y su rival demócrata, el senador George Kerry. Dos de las principales cadenas televisoras de los EEUU, ABC y CBS, convinieron en señalar que el candidato del Partido Demócrata se impuso sobre el candidato del Partido Republicano, en un debate que se centró en temas de políticas exterior y seguridad nacional (a los que no es ajena la guerra en Irak). La prensa internacional resaltó el nerviosismo del presidente Bush (que lucía “exasperado”, según un comentarista de *The New York Times*) frente a un Kerry que parecía mejor plantado y que incomodó en muchas ocasiones al mandatario, al cuestionarlo sobre temas como la llamada “guerra preventiva” en el caso de Irak. Sobre esto último, Bush justificó ese tipo de estrategia aduciendo que “el enemigo nos atacó”, a lo cual Kerry replicó diciendo que Hussein no era ese enemigo. La respuesta del candidato republicano fue: “claro que sé que Osama Bin Laden nos atacó”. Ese es un ejemplo del tono que prevaleció en

el debate y que justificaría la apreciación de que el mismo fue favorable para Kerry.

Se trae esto último a colación para contrastarlo con las opiniones vertidas por varios periodistas y políticos nacionales. Tal parece que el debate presidencial que ellos vieron no fue el mismo que la televisión norteamericana transmitió al resto del mundo. En su opinión, las cosas sucedieron al revés: el presidente Bush se impuso abrumadoramente sobre su contendiente demócrata. Para uno de los periodistas de *Diario El Mundo*, el candidato republicano fue quien “se mostró sereno, seguro de sí mismo, irónico por momentos y tajante en la defensa de sus decisiones”, mientras que Kerry se encontró, en la opinión de otro de ellos, “nervioso e inseguro” y “no supo contrarrestar el sarcasmo de Bush, que le recordó que él apoyó la invasión a Irak”.

La Telecorporación Salvadoreña (TCS), que transmitió el debate, tuvo como comentaristas al Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Julio Rank y a los gerentes de información de dos periódicos matutinos. Los tres panelistas convinieron en señalar que el presidente Bush mostró mayor aplomo durante el debate que su adversario, lo cual contrasta con lo que vio la televisión norteamericana: la inseguridad del candidato republicano, que se centró más en atacar la posición inconsistente de Kerry ante la guerra que en refutarlo.

Más comedidas fueron las apreciaciones del columnista de *El Diario de Hoy*, Eduardo Torres, quien opinó que Kerry “lució tranquilo y relajado, por lo que ha vuelto a meterse en la pelea por la presidencia de Estados Unidos, pues había intranquilidad —y hasta decepción— entre sus partidarios, quienes muy a su pesar iban, poco a poco, resignándose a que la suerte iba prácticamente echándose en su contra”. Con todo, Torres apuntó que el debate fue bastante parejo, sin que uno de los candidatos se impusiera sobre el otro. Asimismo

mo, este periodista recordó que “la suerte aún no está echada” y que la última palabra de la elección presidencial de EEUU no está dicha todavía. Discrepando con la opinión de algunos medios internacionales, Torres sostuvo que “los expertos sostienen que no hubo ganador en el debate”.

Hay opiniones más cercanas a la realidad. El rotativo *La Prensa Gráfica* publicó un comentario de Juan J. Walte, periodista de *USA Today*, donde discrepa con los juicios anteriores, afirmando que, “utilizando términos del boxeo, diría que en una ocasión en la que Bush debiera haber noqueado a su rival, meramente le hizo sangrar la nariz. Kerry parecía más “presidencial,” por decirlo así, aun cuando sus argumentos no siempre hacían sentido y parecían a veces ser contradictorios. Bush, aunque tenía argumentos claros y consistentes, parecía nervioso y a veces distraído.”

Como se ve, entre las voces de quienes niegan que Kerry venció en el debate hay una serie de matices, desde quienes, con total vehemencia, sostienen que el vencedor fue Bush, hasta aquellas voces que optan por afirmar que no hubo ganador. Si puede advertirse una simpatía poco disimulada por parte de algunos comunicadores —o de parte de las empresas mediáticas a las que pertenecen— hacia Bush. Parece ser que muchos de ellos olvidan que las fobias y filias personales o institucionales no deben sesgar la información. Los comunicadores son precisamente eso: agentes del proceso de comunicación. Idealmente, deberían dar elementos al público para que éste se forme su propia opinión acerca de la realidad. Y aunque el discurso de la tan traída y llevada “objetividad periodística” esté más que impugnado, ciertamente los comunicadores no deberían manipular la realidad para apresurar ciertas conclusiones, o para decantar la opinión en un sentido o en otro.

En una situación más delicada se encuentran los personajes públicos que opinaron sobre el debate. Entre estos personajes, descuella el presidente Saca, quien no tuvo empacho en afirmar que Bush se

impuso sobre su rival demócrata. Aunque tenga sus opiniones personales, el presidente de la república no habla en su propio nombre. Sus declaraciones constituyen la postura del gobierno del país sobre determinados problemas.

Es obvio que el gobierno de ARENA simpatiza con Bush, pues la reelección de éste le resulta más conveniente que las incertidumbres que plantea Kerry. Pero un jefe de Estado no puede expresarse como un militante más del partido, pues constituye una falta de tacto político imperdonable. Tras opiniones ligeras como las verdadas por Saca, ¿cómo quedarían las relaciones con EEUU si llegara a ganar Kerry?

Lo ausente en el debate

Aunque algunos gobernantes latinoamericanos se precien de la gran amistad con Washington, lo cierto es que la situación de América Latina pasó desapercibida en un debate cuyo tema era la postura de los candidatos sobre temas de política exterior. El diputado pectenista Mario Ponce resaltó el hecho de que la seguridad nacional es un asunto más prioritario que la relación con los países del Subcontinente. De igual manera se expresó el efemelenista Mario Bernal.

El presidente de la Asociación El Rescate, que trabaja el tema de los derechos de los emigrantes centroamericanos en los EEUU sostuvo que “el debate (...) favoreció a Kerry como un líder político, demostró que tiene planes concretos para lidiar con las situaciones internacionales. El ausente es el tema migratorio, que afecta la seguridad nacional, así como la relación con Latinoamérica”.

Aún falta ver cómo se desarrollan los próximos debates entre Bush y Kerry y entre los candidatos a la vicepresidencia. Queda la duda de si, aparte de la retórica militarista del primero, habrá diferencias sustanciales sobre la manera de encarar los desafíos del mundo contemporáneo, o si solamente habrá una variación de matices entre dos proyectos políticos que coinciden en lo sustancial.

Reinstalos en la PNC

Definitivamente las cuentas no le salen muy bien al actual director de la Policía Nacional Civil (PNC), Ricardo Meneses. A la corrupción interna, los reclamos de su personal por los bajos salarios, los abusos de autoridad, las pandillas y el aumento de víctimas de la violencia social se suma hoy un nuevo problema: cargar con los errores de su antecesor en el puesto. Esta semana supimos que, por orden de la Corte Suprema de Justicia, la institución que conduce debe reincorporar a sus filas una treintena de elementos expulsados de las mismas. Estos empleados fueron removidos de sus cargos durante la administración anterior de Mauricio Sandoval, quien impulsó un proceso de "auto depuración" interno cargado de irregularidades; dicho proceso ya fue revisado por el máximo tribunal del país. Veamos los antecedentes que han dado lugar a este resultado.

Con la llegada de Sandoval a la dirección de la PNC en julio de 1999, la institución fue sometida a múltiples modificaciones con el pretexto de modernizarla y adecuarla a un nuevo modelo de seguridad pública. Es cierto que necesitaba de cambios profundos y urgentes, entre otras razones porque era patente que atravesaba por una severa crisis producto de sus limitaciones y, en consecuencia, por la elevada criminalidad padecida que enfrentaba con escaso éxito. Sin embargo, pese a que de los propósitos iniciales se esperaban transformaciones sustanciales, la reforma no estuvo a la altura de esas expectativas. Ya lo dice el refrán: "De buenas intenciones está empedrado el infierno".

Tanto tiempo estuvo Sandoval al frente de diversos organismos oficiales, en comunicaciones e inteligencia, que terminó confundiendo la PNC con su casa y hasta creyó que sería el próximo Presidente de la República. Así las cosas, fueron muchas las arbitrariedades que cometió y de ellas destaca una: que los cambios estructurales internos los realizó sin una base legal que lo permitiera. Pero luego, la Asamblea Legislativa celebró esos cambios aproban-

do el 6 de diciembre del 2001 una nueva Ley Orgánica de la PNC que comenzaba diciendo en su primer artículo: "Créase la Policía Nacional Civil de El Salvador..." Bueno, y la anterior, ¿no existía o desapareció?

En todo caso, con dicha reforma se consumó la desnaturalización de aquella institución nacida con los acuerdos de paz. Con las medidas impulsadas por Sandoval no se quiso resolver los problemas retomando el rumbo de Chapultepec; más bien se sometió a la PNC a una operación quirúrgica para incorporarle nuevos órganos y el trasplante no resultó tan exitoso como se anunció. La formación recibida por Sandoval en Taiwán, más que mejorar la salud de la PNC, provocó su recaída definitiva y la dejó peor que antes.

El secretismo con que se realizaron estos cambios fue acompañado por la precipitación y la falta de participación. Se trataba de una de las instituciones nacidas tras el fin del conflicto a la que estaban revisando, sin control alguno, de los pies a la cabeza. Por abajo, expulsando elementos que discreparan con su superior inmediato correspondiente o con las políticas del director; por arriba, concentrando éste el máximo poder posible. Así, mecanismos independientes de control institucional, como su Inspectoría General, pasaron a depender de Sandoval. A esto se sumó el hecho que a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, el director contaría con fondos secretos disponibles en cualquier momento.

Como señalábamos, en lo que toca a los mecanismos disciplinarios se llevaron a cabo procesos de depuración al interior de la institución, durante el 2000 y parte del 2001. En diciembre de este último año, la Asamblea Legislativa emitió el Decreto 101 por medio del cual se oficializó la expulsión de decenas de "malos elementos", como aseguraba el entonces director Mauricio Sandoval. Es decir, se dejó abierta de forma permanente la posibilidad de depurar a los miembros de la PNC mediante la figura de la remoción, con o sin indemn-

zación. Es esta reforma la que ahora la justicia ha declarado ilegal; entre otros motivos, porque la mayoría de expulsados lo fueron sin que se probaran los hechos graves y sin permitirles revertir los señalamientos. Por eso ahora se ordena su reincorporación.

Según la decisión de la Corte, la dirección policial no cumplirá sólo regresándolos a sus antiguos empleos. No. Además, deberá destinar más de seiscientos mil dólares para pagar los salarios que estos policías dejaron de percibir mientras esperaban el mencionado fallo judicial. Entre los reincorporados hay subcomisionados, subinspectores, cabos, sargentos y agentes que enfrentaron procesos en un tribunal disciplinario creado por Sandoval. Allí fueron acusados de cometer faltas o delitos graves. No contentos con la decisión, algunos de ellos la rebatieron en los tribunales de justicia. El motivo de acudir a éstos fue porque las depuraciones se realizaron de manera arbitraria, sin respetar las reglas mínimas para un procedimiento de este tipo y sin permitir que los inculpados pudieran alegar nada en su defensa.

De ahí que Meneses no tenga más alternativa que acatar la decisión de las autoridades judiciales. En buen castellano, la Sala de lo Contencioso Administrativo le ha dicho que un funcionario, aunque sea director de la PNC, no puede hacer lo que le dé la gana. Si quiere hacer cambios que los haga, pero respetando la legalidad y la Constitución. Por eso Meneses está cosechando los frutos amargos que sembró su antecesor.

Para los altos mandos de la corporación anterior y su jefe Francisco Flores, la depuración fue todo un éxito por su rapidez y eficacia. El problema se encuentra en que ahora, con el fallo judicial, surge un gasto que no estaba contemplado en el presupuesto policial. ¿Está la PNC preparada para reubicarlos? Más grave aún: se trata únicamente de los primeros treinta miembros reinstalados, pero son muchos más los que esperan una resolución similar.

Sin embargo, no deja de sorprendernos el delfín de Sandoval. Tras conocer la decisión de la Corte, Meneses expresó públi-

camente su inconformidad con la misma. Aseguró que el dinero para las indemnizaciones se obtendrá posiblemente de lo presupuestado para la compra de uniformes, combustibles, pago de locales y servicios básicos. Esa es su estrategia: no cumplir la sentencia; y su táctica para ello: presionar airadamente en público, diciendo que las tareas diarias de la seguridad pública se verán afectadas por falta de dinero. Y todo por las ilegalidades cometidas por su “maestro”.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia supondrá que los policías que fueron depurados ilegalmente volverán a laborar en funciones de acuerdo al rango que tenían. Pero Meneses, que dice respetar las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, asegura no estar de acuerdo con emplear de nuevo a los policías en varios casos. Los asesores legales del actual director le deberán explicar —con paciencia y claridad— que ante un fallo judicial no queda más que cumplirlo, se esté o no de acuerdo. Ese es uno de los fundamentos del Estado de Derecho que él mismo debe hacer respetar.

Como dijimos antes, el problema para la PNC apenas comienza pues en la Corte hay muchos policías más esperando un fallo favorable para regresar a sus puestos de trabajo. Sin perjuicio de estos ajustes, la polémica no se puede trasladar ahora al hecho de si estos agentes eran buenos o malos. Lo preocupante radica en que la institución haya realizado un mal procedimiento para sacarlos y que ahora que deben regresar por orden judicial —¿quién sabe si entre ellos retorne más de alguno verdaderamente “malo”— la institución encargada de la seguridad, el orden y el respeto de la ley se niegue a cumplir lo que es debido. Sólo que esta vez tendrá que pagar caro por ello. La lección que deja esta desatinada experiencia es que para contar con una policía garante de la democracia, la seguridad y los derechos humanos se debe partir de la preparación técnica de sus miembros; no como ocurrió con Sandoval: con cambios cosméticos y arbitrarios.